



**VNiVERSIDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Derecho Privado

Derecho civil

Curso 2014/2015

EL DERECHO AL HONOR, LA INTIMIDAD Y LA PROPIA IMAGEN EN LAS REDES SOCIALES: ESPECIAL REFERENCIA A LOS MENORES DE EDAD.

Lucía García Moreno

Dirigido por Carmen González León

Junio de 2015

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Derecho Privado

Derecho Civil

**EI DERECHO AL HONOR, LA
INTIMIDAD Y LA PROPIA IMAGEN
EN LAS REDES SOCIALES:
ESPECIAL REFERENCIA A LOS
MENORES DE EDAD.**

**THE RIGHT OF HONOUR, PRIVACY
AND SELF-IMAGE IN SOCIAL
NETWORKS: SPECIAL REFERENCE
TO MINORS.**

**Lucía García Moreno
e-mail: lucia.gm@usal.es**

Dirigido por Carmen González León

RESUMEN

Las redes sociales y otros servicios que ofrece Internet son utilizados por un número de personas cada vez mayor. Estas plataformas se configuran como importantes canales de interacción y comunicación que permiten a sus participantes publicar y difundir datos personales e imágenes y relacionarse con otros usuarios. No obstante, la utilización de servicios *online* implican riesgos importantes para la privacidad y este tema preocupa tanto a nivel nacional como internacional. Entre los diferentes peligros que acechan en la Red cobran especial importancia los posibles ataques a los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que se ven expuestos desde el momento que los usuarios se registran hasta incluso después de haberse dado de baja en el servicio. Especial relevancia tiene el hecho de que los menores de edad sean los principales usuarios de las Nuevas Tecnologías, puesto que, dada su mayor vulnerabilidad, existen más posibilidades de que sus derechos se vean comprometidos.

Para garantizar un acceso más seguro a los nuevos servicios *online*, el legislador ha elaborado normas y recomendaciones, dotando de especial protección a los menores, si bien todavía queda un largo camino por recorrer.

PALABRAS CLAVE: honor, intimidad, propia imagen, redes sociales, menores

ABSTRACT

Social networks and other services offered by Internet are used by one growing number of people. These platforms are important channels of interaction and communication that allow its participants to publish and disseminate personal details and images, and interact with other users. However, the use of online tools involves many risks to privacy and this topic aroused great interest at both the national and international level. Between the different dangers facing in the Network take on special importance possible attacks on rights to honour, privacy and self-image, who are exposed from the moment that users are set them to even after being cancelled their accounts. Particularly relevant children are the main users of New Technologies, since, given their vulnerability, there is more possibility that their rights suffer disadvantages. To ensure more secure access to new services online, the legislator has developed standards and recommendations, giving special protection to minors, although there is still a long way to go.

KEYWORDS: honour, privacy, self-image, social networks, minor.

Índice

INTRODUCCIÓN	1
1. El derecho y las redes sociales. Cuestiones generales.	3
1.1. Las redes sociales y los retos jurídicos que plantean.....	3
1.2. Marco jurídico aplicable	6
2. Derechos al honor, la intimidad y la propia imagen en las redes sociales.	13
2.1. Derecho al honor.....	13
2.2. Derecho a la intimidad personal y familiar	15
2.3. Derecho a la propia imagen.....	18
2.4. Protección civil de la violación de los derechos de la personalidad a través de las redes sociales. Reparación de la intromisión	20
2.5. La responsabilidad del prestador de servicios	22
3. Derechos de personalidad del menor. Intromisiones ilegítimas en Internet.	24
3.1. Consideraciones generales	24
3.1.1. Principios que inspiran la normativa sobre protección del menor	25
3.2. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor en la Red. ..	26
3.2.1. Derecho al honor	30
3.2.2. Derecho a la intimidad	30
3.2.3. Derecho a la propia imagen.....	32
3.3. Posibles medidas ante la vulneración de los derechos de la personalidad del menor en Internet	34
3.4. El menor de edad y los <i>smartphones</i> : el <i>WhatsApp</i>	35
3.5. Consideraciones finales.....	37
CONCLUSIONES	38

BIBLIOGRAFÍA	41
Páginas web	43
Reseña jurisprudencial.....	44

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se centra en el estudio de los peligros que las nuevas tecnologías, especialmente Internet y las redes sociales entrañan para los derechos de la intimidad y la protección de datos de las personas que los utilizan, e incluso para otras personas que no los usan activamente.

El principal propósito del trabajo es determinar la influencia de la “red de redes” en los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen para, a continuación, hacer un análisis crítico de las normas que se aplican para abordar los problemas que se plantean en este ámbito, especialmente respecto a los menores de edad y, por último, intentamos proponer algunas soluciones al respecto.

La relevancia del tema se pone de manifiesto por la creciente importancia que ha experimentado Internet en los últimos años. Si bien surgió como algo extraordinario e inusual, que parecía limitado a unos pocos “privilegiados” que gozaban de amplios conocimientos en la materia; hoy en día se ha convertido en una herramienta cotidiana e imprescindible para la mayoría de la población, que es accesible para personas de casi todas las edades porque resulta relativamente fácil de utilizar. Así, Internet se configura como un instrumento ideal para realizar cualquier tipo de actividad de carácter económico, lúdico, social o cultural de una forma rápida y sencilla; pero, a su vez, también resulta fácil que mediante su uso se puedan causar lesiones a los derechos de terceros, e incluso que se puedan cometer hechos delictivos.

En este contexto de desarrollos de las tecnologías de la información han adquirido gran relevancia las redes sociales *online*, a través de las cuales los usuarios se mantienen en contacto con personas de su entorno, conocen otras personas y comparten todo tipo de información. En muchos aspectos las redes sociales suponen un avance extraordinario, pero también facilitan el que se produzcan intromisiones ilegítimas en multitud de derechos, no solo de los propios usuarios, sino incluso de personas ajenas a la red social. Al abordar estas cuestiones, se ha de tener en cuenta que los principales usuarios de las redes sociales son los menores, los nacidos en la denominada “Sociedad Red”.

Para los menores las redes sociales son el mecanismo perfecto para comunicarse, informarse y divertirse. No obstante, y pese a la habilidad que muestran ante las Nuevas Tecnologías, se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad e indefensión que

los adultos. De ahí la necesidad de conocer las respuestas que ofrece el Derecho a los numerosos interrogantes que este fenómeno plantea. Como ha afirmado la Audiencia Provincial de Madrid en la Sentencia 50/2006, de 6 de febrero (LA LEY 350/2006), “Internet es un sueño para sus usuarios y una pesadilla para los prácticos del derecho”. En definitiva, parece imprescindible hacer un análisis acerca de hasta qué punto el ordenamiento jurídico español ofrece mecanismos efectivos para solucionar los problemas y conflictos que surgen en el ámbito de las redes sociales.

Para responder a estas cuestiones, empezamos el trabajo haciendo una breve referencia al concepto, al funcionamiento y a los retos que plantean las redes sociales para, seguidamente, analizar las normas de nuestro ordenamiento jurídico que resultan aplicables en estos supuestos.

A continuación, nos referimos a la influencia que Internet y las redes sociales ejercen sobre los derechos de la personalidad de la ciudadanía en general. Analizamos los peligros a los que se ven expuestos y las respuestas que ofrece el derecho español. Nos centramos esencialmente en las soluciones que ofrece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, relativa a los derechos de la personalidad que desarrolla el artículo 18.1 de la Constitución Española; y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal y su Reglamento de desarrollo, que amplían la regulación contenida en el artículo 18.4 de la Constitución.

Por último nos ha parecido necesario profundar en el análisis de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen del menor y de los supuestos en que estos derechos se ven perturbados por el uso indebido de las Nuevas Tecnologías, haciendo una mención especial a un fenómeno tan actual y masivo como el *Whatsapp*. Para ello, es fundamental conocer las especialidades que introduce la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor respecto de la regulación general para este tipo de usuarios.

En resumen, con este trabajo pretendemos ofrecer una visión de la situación de los derechos de la personalidad en la actual sociedad de la información, en la que se hace referencia tanto a la exposición de los riesgos y problemas a que se ven sometidos, como al análisis crítico de la normativa existente sobre la materia y a la propuesta de algunas soluciones de mejora.

1. El derecho y las redes sociales. Cuestiones generales.

1.1.Las redes sociales y los retos jurídicos que plantean

Las redes sociales son sitios webs que permiten a los usuarios generar un perfil público, al que se añaden datos personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten relacionarse con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado¹.

Se pueden distinguir tres tipos de redes sociales: genéricas o de ocio, que son las más extendidas y tienen como objetivo favorecer las relaciones personales entre los usuarios (como *Facebook*, *Instagram* o *Twitter*); profesionales, que facilitan la conexión entre personas relacionadas laboralmente (como *LinkedIn*); y temáticas, basadas en un tema concreto, cuyos miembros comparten un hobby o actividad (como *Flickr* o *Youtube*)

Es evidente la importancia que hoy en día han adquirido las redes sociales, así como las numerosas ventajas que ofrecen; pero también presentan grandes riesgos, entre los que cabe destacar: los relativos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, los que afectan a la protección de datos de carácter personal, los referidos a los derechos de propiedad intelectual e industrial y aquellos relacionados con los derechos de los consumidores y usuarios.

a) En cuanto al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen² frente a los nuevos desafíos que plantea la utilización de las redes sociales, cada vez resulta más difícil proteger de forma efectiva los derechos de la personalidad de quienes utilizan este tipo de servicios.

Así, en el momento de registro en una red social, se exige al usuario aportar un gran número de datos personales, que afectan al núcleo básico de su intimidad (nombre, apellidos, ideología o datos profesionales, entre otros). Además, las políticas de privacidad de este tipo de plataformas suele ser poco claras, no precisando el uso que puede hacerse de los datos.

¹INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) y AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). “Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes sociales online”, 2009, p. 7. www.inteco.es, www.agpd.es

² Sobre el concepto de derecho al honor, intimidad y propia imagen, véase GRIMALT SERVERA, P, *La protección civil de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen*, Iustel. Madrid, 2007, pp. 27-37.

A su vez, a medida que se utiliza la red, es habitual publicar imágenes, vídeos e información, tanto propia como de terceros (que no tienen por qué ser usuarios de la red social en cuestión), que también pueden afectar a los citados derechos de la personalidad. Además, como señala BELTRÁN CASTELLANOS, “puede darse el caso de que se publique en la Red información falsa o sin nuestra autorización, generando situaciones jurídicas perseguibles como delito de injurias e incluso calumnias”³.

Asimismo, las redes sociales permiten a los usuarios configurar identidades ficticias, lo que posibilita suplantar la identidad de terceras personas fácilmente.

Otro problema fundamental es la descontextualización de la información, es decir, que los datos publicados se utilicen en un contexto distinto de aquél para el que se proporcionaron.

Por último, al darse de baja, existe el riesgo de que no se eliminen los datos incorporados, principalmente los datos propios pero incluidos por otros usuarios. De hecho, ni siquiera se borra la cuenta instantáneamente, sino que queda en suspensión por un determinado periodo de tiempo. Así, en el caso de *Facebook*, la única forma de que todos los datos desaparezcan es borrar una por una la información compartida, si bien el nombre de usuario deja de estar asociado a esa información⁴.

Los problemas citados se agravan si pensamos en los menores de edad, que se han convertido en los usuarios mayoritarios de estos servicios. En este sentido, y como estudiaremos más adelante, existe hoy un debate muy interesante en torno a cómo articular la especial protección que merecen en función del grado de madurez que hayan alcanzado, haciéndolo compatible con el ejercicio de la patria potestad por parte de sus padres o tutores.

b) Respecto a la protección de datos de carácter personal⁵, los riesgos surgen como consecuencia de la gran cantidad de datos personales publicados por los propios usuarios en sus perfiles de las redes sociales. En este sentido, cabe mencionar algunos de los más frecuentes, como el *phishing*, para obtener información confidencial, como

³ BELTRÁN CASTELLANOS, J.M., “Aproximación al régimen jurídico de las redes sociales” *Cuaderno Electrónico de Estudios Jurídicos*, núm. 2, 2014, p. 66. www.ceej.es

⁴ LORENTE LÓPEZ, M.C., “La vulneración de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores a través de las Nuevas Tecnologías”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 2/2015, pp. 210 y 211.

⁵ Respecto de esta cuestión, *vid.* APARICIO SALOM J., *Estudio sobre Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal*, Aranzadi, 2002.

contraseñas o información bancaria, de forma fraudulenta; el *pharming* o suplantación de e-mails o páginas web, con el objetivo de adquirir información confidencial de los usuarios, que acceden engañados; el *social spammer*, consistente en el envío de mensajes, correos electrónicos, invitaciones y/o comentarios realizados a través de redes sociales, para llevar a cabo actos de *phishing*, envíos de código malicioso o publicidad no deseada, la propagación de virus y otros contenidos dañinos; el *scam*, que implica publicar mensajes falsos en la red social para hacer que los usuarios enlacen hacia una página con contenido dañino; y el *likejacking*, consistente en marcar automáticamente y sin consentimiento una página como favorita en un perfil de *Facebook* cuando el usuario pulsa sobre un mensaje, con lo que se tiene acceso al perfil del usuario engañado y de sus contactos⁶.

c) En relación con la propiedad intelectual e industrial, se aprecia un aumento en el número de contenidos protegidos por el citado derecho de propiedad intelectual que están siendo empleados, compartidos y divulgados a través de las redes sociales y sitios webs colaborativos⁷.

Para intentar evitar este tipo de situaciones, las propias plataformas disponen de ciertos mecanismos que permiten a los usuarios avisar a la red social de la existencia de contenidos que vulneran estos derechos, que pueden ser quebrantados no sólo por el resto de usuarios sino también por la propia red social.

d) Por último, se debe señalar que los derechos de los consumidores y usuarios también se pueden ver afectados porque, hoy en día, las redes sociales cumplen una función de carácter comercial o económico. Son utilizadas por las empresas con el objetivo de publicitar sus productos y servicios y para obtener nueva clientela. Las redes sociales permiten que la publicidad llegue a un mayor número de personas y, dado que se pueden conocer los gustos de los usuarios, las posibilidades de aumentar sus clientes son grandes. En este sentido, sería necesario que las redes sociales ofreciesen a los usuarios las medidas oportunas para controlar y “denunciar” el contenido de la citada publicidad y proteger más eficientemente sus derechos.

⁶ ÁLVAREZ HERNANDO, J., “Internet, redes sociales y protección de datos” en ÁLVAREZ HERNANDO, J., CAZURRO BARAHONA, V., *Grandes Tratados. Practicum Protección de Datos*, Aranzadi, 2014, p. 841.

⁷INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) y AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). “Estudio sobre...”, op. cit., p. 12.

1.2.Marco jurídico aplicable

En función del tipo de actuaciones que se desarrollan en el ámbito de las redes sociales, se aplican, como vamos a ver a continuación, diferentes normas jurídicas

a) Servicios de la sociedad de la información

En el caso de los servicios de la sociedad de la información, hay que tener en cuenta la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante, LSSICE) y la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (en adelante, LMISI).

El artículo 1 de la LSSICE establece que esta Ley se encarga de regular el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, así como las obligaciones de los prestadores de servicios electrónicos en las redes de comunicaciones.

A estos efectos, por prestadores de servicios de la sociedad debe entenderse aquellos que suministran servicios a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario, normalmente a título oneroso, esto es, como manifestación de una actividad económica⁸.

Para que la LSSICE resulte de aplicación a una determinada red social, ésta tiene que cumplir, como establecen los artículos 2 y 3 de la misma, una serie de requisitos:

- Que el prestador de servicios de la sociedad de la información se encuentre establecido en España. En este sentido, se entenderá que un prestador de servicios está establecido en España cuando su residencia o domicilio social se encuentren en territorio español, siempre que éstos coincidan con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección.
- Que el prestador, a pesar de encontrarse en otro Estado, ofrezca sus servicios a través de un establecimiento permanente situado en España. Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento permanente situado en territorio

⁸ MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., “Servicio Público Electrónico y Responsabilidad”, *Revista Española de Derecho Administrativo*, núm. 155, Cizur Menor, Navarra, 2012, p. 313.

- español cuando disponga en el mismo, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo, en los que realice toda o parte de su actividad.
- Que el sitio web, a pesar de ser propiedad y alojarse en servidores externos de la Unión Europea, dirija sus servicios específicamente al territorio español, siempre que ello no contravenga lo establecido en los tratados o convenios que le sean aplicables.

La LSSICE impone a los prestadores de servicios dos tipos de obligaciones fundamentales: un deber de información, a favor, tanto de usuarios como de autoridades competentes, respecto a aspectos como su nombre o denominación social, precio de sus productos o información fiscal (artículo 10); y un deber de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas (artículo 12), que supone que los prestadores de servicios sólo podrán guardar los datos necesarios para realizar su función y que están obligados a emplear los mecanismos oportunos para evitar su pérdida o difusión.

Respecto a la LMISI, cabe destacar que la promulgación de esta norma responde, a estos efectos, al hecho de que la LSSICE data de 2002, fecha en la que las redes sociales apenas habían aparecido. De ahí que la LMISI trate, por una parte, de reforzar los derechos de los usuarios de las redes sociales y de aumentar la seguridad de quienes participan activamente en ellas y, por otro lado, de incrementar la cantidad de información aportada por los prestadores de servicios a sus clientes, a fin de protegerlos frente a fenómenos como virus o programas espía.

b) Protección de datos personales

La protección de datos de carácter personal se recoge, como derecho fundamental, en el artículo 18.4 CE⁹ y está regulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante, RDLOPD). A ello, hay que añadir

⁹ El artículo 18.4 CE dispone que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, que tienen una importancia fundamental en relación a la interpretación de estas normas¹⁰.

Tal y como establece el artículo 1 LOPD, “la presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”.

En cuanto al ámbito de aplicación, conforme al artículo 2 de la LOPD, esta Ley se aplicará en los siguientes casos:

- Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.
- Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho Internacional público.
- Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito.

A su vez, el título II de la LOPD (artículos 4 a 12) establece los principios a los que debe responder todo tratamiento de datos de carácter personal.

En este sentido, los datos de carácter personal tratados han de ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Así, no se podrán utilizar para finalidades para las cuales no hayan sido recabados, deberán cancelarse cuando dicha finalidad cese y han de ser exactos y veraces (debiendo ser corregidos en caso de error) Además, han de ser recogidos empleando medios leales y lícitos (artículo 4 LOPD).

Igualmente, conforme al artículo 5 LOPD, el afectado ha de ser informado, en el momento en que se recaben sus datos, del alcance del tratamiento que se va a realizar, de los destinatarios de la información y de la posibilidad de ejercitar los denominados derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición). Además, el afectado

¹⁰ Junto a la normativa citada, tienen una importante influencia sobre las redes sociales la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de Conservación de Datos relativos a la Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones.

ha de consentir de manera libre, inequívoca, específica e informada sobre dicho tratamiento (artículo 6 LOPD) y, de acuerdo al artículo 7 LOPD, su consentimiento deberá ser expreso y por escrito si se trata de datos especialmente protegidos (como, por ejemplo, los relativos al origen racial, la salud o la ideología).

Si los datos no han sido obtenidos del interesado, el responsable del fichero deberá informar al mismo en el plazo de tres meses de dicha obtención (artículo 5.4 LOPD). De ahí que cuando un contacto sube fotografías de terceras personas a la red social, la citada red social está obligada a informar a los terceros de esa subida y de que se ha vinculado esa fotografía a los datos o al perfil de dichos usuarios.

Toda empresa, organización o institución que almacene, trate y acceda a datos de carácter personal, deberá aplicar medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad e integridad de la información (artículo 9 LOPD). Asimismo, pesa un deber de secreto sobre todo aquél que trate o acceda a ficheros que contienen datos personales (artículo 10 LOPD).

Finalmente, respecto a la comunicación de los datos a terceros, el artículo 11 LOPD exige siempre del consentimiento del interesado, y sólo se puede realizar para fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario.

En cuanto a los derechos ARCO, el artículo 15 LOPD regula expresamente el derecho de acceso. Por su parte, el artículo 16 regula los derechos de rectificación y cancelación. En este sentido, destaca el primer apartado del citado artículo 16, que establece que: “el responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días”. No obstante, en la práctica, muchas veces no se respeta esta norma, porque como destaca BELTRÁN CASTELLANOS, “una vez que nos damos de baja en la red social nuestros datos permanecen en la misma, y la cuenta de la que somos usuarios no queda deshabilitada hasta pasar un plazo superior, normalmente a un mes, teniendo siempre el usuario la opción de recuperarla con sólo introducir su nombre y contraseña de nuevo en el servidor”¹¹. Ya que, por regla general, la red social mantiene los datos por si los usuarios quieren volver en un futuro.

¹¹BELTRÁN CASTELLANOS, J.M., “Aproximación...”, op. cit., p. 71.

c) Protección del el honor, la intimidad y la propia imagen

En nuestro país, los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, aparecen reconocidos en el artículo 18.1 CE¹², y este precepto se ha desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen (en adelante, LOPDH).

El artículo 7 LOPDH señala las actuaciones que tienen la consideración de intromisiones ilegítimas y se refiere a las siguientes:

- La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.
- La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.
- La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2.
- La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
- La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Dado el contenido del citado artículo 7 LOPDH, es fácil imaginar que las redes sociales se han convertido en un medio idóneo para afectar el honor, la intimidad y la propia imagen.

Las intromisiones ilegítimas, además, pueden tener no solo consecuencias civiles sino también penales. Desde el punto de vista penal, son los títulos X y XI del Código Penal los que regulan los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio y los delitos contra el honor.

¹² El art. 18.1 CE establece que “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y al a propia imagen”.

d) Protección de los derechos de propiedad intelectual

Existe una amplia normativa destinada a proteger los derechos de propiedad intelectual, especialmente en la sociedad de la información, como son:

- El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
- La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
- La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información

A pesar de que se trata de normas actualizadas para poder adaptarlas a los usos que se hacen de los contenidos protegidos por la propiedad intelectual a través de los servicios de la sociedad de la información, existen dificultades para alcanzar la protección plena de los derechos de los autores¹³.

Para tratar de reducir estas situaciones, la LSSICE otorga a los proveedores de servicios de Internet (entre ellos, a las redes sociales) la capacidad de controlar los contenidos alojados en las mismas.

Desde el punto de vista de la regulación penal, los artículos 270 a 277 del Código Penal regulan los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.

e) Protección de consumidores y usuarios

Dada la función económica que también cumplen las redes sociales y para evitar que los empresarios, tratando de maximizar sus beneficios económicos, pongan en riesgo los intereses de consumidores y usuarios, en muchos casos será conveniente aplicar, si es posible, la regulación establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y usuarios, especialmente las normas sobre oferta y contratación a distancia, reguladas en el título III de dicho Texto Refundido.

¹³ INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) y AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), “Estudio sobre...”, op. cit., p. 127.

f) Protección de menores

La protección de los menores en el ámbito de las redes sociales merece un análisis especial. En cuanto a las posibles intromisiones ilegítimas en los derechos al honor, la intimidad o la propia imagen de los menores de edad, habrá que estar a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LOPJM); y, respecto a la protección de datos, hay que tener en cuenta la regulación del RDLOPD.

La LOPJM se ocupa de la regulación del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen del menor, y en su artículo 4 establece que: “la difusión de información o la utilización de imágenes o nombres de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados”. Este precepto refuerza lo establecido por el artículo 3 de la LOPDH, que permite a los menores autorizar la intromisión en sus derechos de la personalidad, siempre que sus condiciones de madurez lo permitan. De manera que, en caso contrario, serían sus representantes legales los que debieran consentir tales intromisiones, debiendo poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado.

Respecto a la protección de datos de carácter personal de los menores, el RDLOPD se ocupa de manera específica de este supuesto. Concretamente, regula en su artículo 14 cómo se ha de prestar el consentimiento para un adecuado tratamiento de datos de los menores. Establece que los menores que tengan catorce años pueden prestar el consentimiento por sí mismos, salvo las excepciones previstas por la ley, mientras que en el caso de los menores de catorce años, serán sus padres o tutores los que deberán otorgar el consentimiento. Para obtener este consentimiento, la ley exige que se emplee un lenguaje sencillo y fácil de comprender por el menor, prohibiendo que se obtenga de esta manera información sobre sus familiares o allegados.

De lo establecido en el artículo 14 RDLOPD se deduce la necesidad de que las redes sociales adopten medidas oportunas para que sea posible identificar la edad de quienes se registran, y para asegurar que el consentimiento prestado por padres y tutores es

auténtico. No obstante, como veremos más adelante, la realidad es que no se han establecido mecanismos efectivos al respecto, de manera que los derechos del menor, en este ámbito, no están adecuadamente protegidos.

2. Derechos al honor, la intimidad y la propia imagen en las redes sociales.

Internet y las redes sociales han supuesto una auténtica revolución en nuestras vidas, y esta revolución, junto con una infinidad de ventajas, tiene el importante inconveniente de que nuestros derechos personales se ven cada vez más comprometidos. Como vamos a estudiar a continuación, esta nueva realidad amenaza directamente nuestros derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

2.1. Derecho al honor

El Tribunal Constitucional ha señalado que “el honor, derecho de la personalidad que suele clasificarse dentro de los de proyección social, se manifiesta como honra, especie de patrimonio moral de la persona, consistente en aquellas condiciones que ésta considera expresión concreta de su propia estimación o, en sentido objetivo, como reputación, esto es, la opinión o estima que de la persona tienen los demás”¹⁴.

Tradicionalmente las intromisiones en el derecho al honor provenían, de forma mayoritaria, de manifestaciones realizadas a través de los medios de comunicación escritos o audiovisuales. La aparición de Internet y la expansión de herramientas y aplicaciones de transmisión de información (especialmente de opinión, como webs, chats, foros, blogs o redes sociales, donde todos nos convertimos en arquitectos de la Red dada la facilidad para introducir contenidos en ellas por cualquier persona), suponen que las posibilidades de vulnerar el derecho al honor son mayores y pueden tener mayor repercusión¹⁵. Así, es habitual encontrar comentarios que son verdaderas injurias y calumnias y que menoscaban la reputación de la persona contra la que van dirigidos.

La proliferación de conductas que atentan contra el derecho al honor se ve propiciada y facilitada por dos factores. En primer lugar, por el anonimato que ofrece Internet, si bien se trata de un anonimato aparente, puesto que todo usuario de Internet está identificado

¹⁴ STC 9/2007, de 15 de enero (LA LEY 217/2007).

¹⁵ MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J.A., “Implicaciones del uso de internet en la protección del derecho al honor” *Autoridad Civil*, núm. 4, Sección Estudios de Jurisprudencia, 2014, p. 414.

por un número IP único que queda grabado y, a través de la correspondiente operadora de la red administradora del mismo, es posible identificar al sujeto concreto que llevó a cabo una conducta determinada. En segundo lugar, el aumento de conductas que atentan contra el derecho al honor se ve favorecido por la gran capacidad que presentan buscadores como *Google* para referenciar e indexar información y mostrárnosla por orden de relevancia¹⁶.

Frente a este tipo de intromisiones al derecho al honor, tenemos una normativa de protección tanto en la vía civil, a través de la ya citada LOPDH, como en la vía penal, a través de la regulación de los delitos de injurias y calumnias. Por su parte, y concretamente en el ámbito del ciberespacio, el artículo 8.1 LSSICE afirma que: “En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes [...] podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Y entre los principios a que alude el apartado 1 del citado artículo se encuentra, en la letra c, “el respeto a la dignidad de la persona [...]”.

En todo caso, es necesario aclarar que el derecho al honor no tiene carácter absoluto, sino que encuentra sus límites en la libertad de expresión y en el derecho a la información. La libertad de expresión protege pensamientos, ideas y opiniones. El derecho a la información se refiere a una información veraz, y está especialmente vinculado a los medios de información; mientras que la libertad de expresión tiene un marco de actuación mayor¹⁷. En todo caso, estos límites están plenamente vigentes cuando nos encontramos en el ámbito informático. Como señala Cotino Hueso, “en tanto en cuanto Internet es un canal de comunicación, queda protegido por la libertad de expresión e información, como desde 1997 afirmase con claridad el Tribunal Supremo de los EE.UU. (*ACLU vs. Reno* de 1997)”. Añade este autor que “como punto de partida, tanto los modos de comunicación personal en Internet (correo, chat, foros, etc.) cuanto los medios de comunicación en Internet (*blogs*, páginas *web*, periódicos digitales, etc.) están protegidos por estas libertades.”, y que “la más intensa protección de estos derechos a los medios se justifica por la función social o constitucional que desarrollan los medios de comunicación en la sociedad democrática”, puesto que “sin

¹⁶ SALGADO SEGUÍN, V., “Nuestros derechos, en riesgo. Intimidad, privacidad y honor en Internet”, *Revista TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación)*, núm. 85, 2010, p. 76.

¹⁷ SANCHIS CRESPO, C., “La tutela judicial del derecho al honor, Internet y la blogosfera” *Diario La Ley*, núm. 8035, Sección Doctrina, 2013, p. 6.

duda hoy día esta función la desarrollan todos los usuarios de Internet en general, no solo los medios institucionalizados”¹⁸.

Así, la libertad de expresión y de información prevalecerán frente al derecho al honor cuando se den los siguientes requisitos¹⁹: a) carácter o condición pública de la persona afectada, b) interés general y relevancia pública de la información divulgada, y c) veracidad de la información, según los cánones de la profesionalidad informativa y con ausencia de expresiones injuriosas o difamantes.

2.2. Derecho a la intimidad personal y familiar

Uno de los derechos que se ven más amenazados por las nuevas tecnologías es el derecho a la intimidad y, junto a él, como vamos a ver, también se ve afectado el denominado derecho a la privacidad.

El derecho a la intimidad, como ha señalado el TC, “tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y el conocimiento de los demás, sean estos poderes públicos o simples particulares”²⁰ Este derecho “se extiende, no sólo a aspectos de la vida propia y personal, sino también a determinados aspectos de la vida de otras personas con las que se guarde una especial y estrecha vinculación, como es la familiar; aspectos que, por la relación o vínculo existente con ellas, inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo que los derechos del art. 18 de la C.E. protegen”²¹.

Por su parte, la privacidad comprende una esfera más amplia que la de la intimidad, que protege de la tenencia y tratamiento, tanto por parte de terceros como de los poderes públicos, de todos los datos vinculados a una persona. Así, este derecho se configura como un poder de disposición de los propios datos, no sólo referidos a la vida privada, sino a cualquier otro ámbito donde una persona despliegue su actividad. En definitiva, la privacidad implica el derecho a mantener ciertos aspectos de nuestra vida fuera del alcance de otras personas. En este sentido, las redes sociales y, en general, las

¹⁸ COTINO HUESO, L., “Datos personales y libertades informativas, medios de comunicación social como fuentes accesibles al público”, en TRONCOSO REIGADA, A., *Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal*, Civitas, Madrid, 2010, p. 304.

¹⁹ Vid. Sobre este tema MOLINER NAVARRO, R., “El derecho al honor y su conflicto con la libertad de expresión y el derecho a la información”, en DE VERDA Y BEAMONTE, J.R., *Veinticinco años de aplicación de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2007, p. 50.

²⁰ STC 99/2002 de 6 de mayo (LA LEY 5500/2002).

²¹ STC 196/2004, de 15 de noviembre. (LA LEY 2437/2004).

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), permiten obtener un gran número de datos de un individuo, ponerlos en relación y obtener un perfil exhaustivo del mismo.

Entre las características que presentan las redes sociales en relación a los citados derechos a la intimidad y a la privacidad, podemos destacar las siguientes²²:

- Los datos de los que disponen las redes sociales son generalmente proporcionados por los propios interesados.
- A dichas redes acceden todo tipo de entidades para obtener información de los interesados y confeccionar los perfiles de gustos y compras potenciales.
- Dichos datos, desde el momento en que se otorgan, son cedidos y compartidos con terceros que, a su vez, pueden volver a comunicarlos a otras personas o a entidades, dificultando su control y su posible retirada. Por ejemplo, *Facebook*, en su Política de Privacidad ha establecido que “no podemos y no garantizamos que el Contenido de Usuario que publiques en el Sitio no será visualizado por personas no autorizadas”
- La comunicación de los datos se realiza a nivel global, es decir, no sólo circulan por el país de residencia del interesado, sino también por países distintos.
- Resulta prácticamente imposible determinar donde se almacena físicamente la información, dado que se utilizan los sistemas de *cloud computing*, que exigen que los datos se traten en cientos de ordenadores repartidos por todo el mundo.
- La mayoría de las redes sociales son propiedad de empresas ubicadas en EE.UU., de manera que los riesgos se ven agravados, dada la distinta concepción que este país tiene sobre la privacidad, puesto que este derecho no tiene la consideración de derecho fundamental²³

A todo esto hay que añadir que en el ámbito de la intimidad y privacidad ha surgido un nuevo factor que fomenta las intromisiones en estos derechos: la aparente gratuidad de los servicios que ofrece Internet. La realidad es que estos servicios no son gratuitos, pues aunque no paguemos con dinero pagamos con datos. Toda la información que aportamos (como por ejemplo la relativa a nuestros gustos, aficiones o hábitos de

²² SALGADO SEGUÍN, V., “Nuestros derechos...”, op. cit., p. 74.

²³ Sobre esta cuestión, véase ABRIL, P. S y PIZARRO MORENO, E., “La intimidad europea frente a la privacidad americana. Una visión comparativa del derecho al olvido” *InDret*, 2014.

consumo) es recabada por distintas entidades, ya sea con fines comerciales, económicos, políticos o de seguridad²⁴.

Como indica BARRIUSO, “cuantos más datos estén disponibles para el análisis y más poderosas sean las herramientas de análisis, más significativa será la información que se obtenga y más riesgos habrá de vulnerar la intimidad y las prescripciones sobre protección de datos personales”²⁵.

En todo caso, para minimizar estos riesgos, el primer paso que recomienda la AEPD es que el usuario configure adecuadamente el grado de privacidad del perfil en la red social, teniendo en cuenta que, por defecto, se establece un grado de privacidad mínimo. De esta forma, se consigue que únicamente puedan acceder a la información publicada aquellas personas señaladas como “amigos” previamente por el usuario y evita que el citado perfil sea completamente público²⁶.

Además, sin perjuicio de la responsabilidad aplicable a los prestadores de servicios, tema que después se analizará, se están empezando a imponer obligaciones a los usuarios de las redes sociales. Ahora bien, ello dependerá del número de personas a las que llegue la información compartida. Esto se debe a que el art. 2.2.a LOPD establece que la Ley no será de aplicación “a los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades absolutamente personales o domésticas”. En este sentido, la Audiencia Nacional ha establecido que “será personal cuando los datos tratados afecten a la esfera más íntima de la persona, a sus relaciones familiares y de amistad y que la finalidad del tratamiento no sea otra que surtir efectos en estos ámbitos”²⁷. Ahora bien, existen tres supuestos en los que tales actividades no estarían cubiertas por la excepción doméstica²⁸:

- Cuando se utiliza la red social como plataforma de colaboración para una asociación o una empresa.
- Cuando se trate de datos especialmente protegidos
- Cuando se supere dicho ámbito personal. En este sentido, el Dictamen 5/2009 relativo a las redes sociales en línea, adoptado el 12 de junio de 2009 por el

²⁴ SALGADO SEGUÍN, V., “Nuestros derechos...”, op. cit., p. 72.

²⁵ BARRIUSO, C., “Las Redes Sociales y la Protección de Datos Hoy”, *Anuario Facultad de Derecho*, núm. II, Universidad de Alcalá, 2009, p. 304.

²⁶ ÁLVAREZ HERNANDO, J., “Internet, redes sociales...”, op. cit., p. 841.

²⁷ SAN de 15 de junio de 2006 (LA LEY 78033/2006).

²⁸ ÁLVAREZ HERNANDO, J., “Internet, redes sociales...”, op. cit., pp. 844 y 845.

Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE señala que: “Generalmente, el acceso a los datos de un usuario se limita a los contactos elegidos. Sin embargo, en algunos casos, los usuarios pueden adquirir un gran número de contactos con terceros y no conocer a alguno de ellos. Un gran número de contactos puede indicar que no se aplica la excepción doméstica y el usuario podría entonces ser considerado como un responsable del tratamiento de datos”.

En estos supuestos, nos encontraríamos ante una cesión de datos sujeta a la LOPD, que exige consentimiento previo e inequívoco de las personas afectadas o de sus representantes legales.

En el caso de que los datos se encuentren ya publicados, si se desea saber de qué datos dispone la red social o si se desean actualizar o eliminar, se deberán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO). El derecho de acceso permite conocer qué datos tienen sobre nosotros, de dónde proceden y a quién se los han cedido; el derecho de rectificación posibilita que se solicite que los datos erróneos o incompletos se corrijan; el derecho de cancelación permite que se supriman datos inadecuados o excesivos y el derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo.

Estos derechos podrán ejercitarse de forma gratuita ante el titular o responsable de la web, mediante los datos de contacto indicados por él mismo conforme al art. 5 LOPD²⁹.

Finalmente, en caso de vulneración de los derechos analizados, se podría acudir tanto a la vía administrativa, interponiendo denuncia ante la AEPD; al orden jurisdiccional civil, y al orden jurisdiccional penal, por la comisión de delitos contra la intimidad.

2.3. Derecho a la propia imagen

El aumento de herramientas y aplicaciones que permiten publicar fotografías y vídeos, así como la gran capacidad de difusión de dichos contenidos a través de Internet, provocan que, una vez introducidos en la red, miles de usuarios puedan acceder a ellos, con el riesgo que ello implica para el derecho a la propia imagen.

²⁹ https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/principales_derchos/index-ides-idphp.php

En palabras del Tribunal Constitucional, “el derecho a la propia imagen consagrado en el art.18.1 CE se configura como un derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener difusión pública. La facultad otorgada por este derecho, en tanto que derecho fundamental, consiste en esencia en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad – informativa, comercial, científica, cultural, etc. perseguida por quien la capta o la difunde.”³⁰

En el ámbito del derecho a la propia imagen y las redes sociales, se plantean dos grandes problemas: Por un lado, la publicación por parte de terceros de imágenes de una persona sin su consentimiento y, por otro lado, la utilización en otros ámbitos ajenos a la red social de las imágenes publicadas.

En cuanto a la publicación por parte de terceros de imágenes de una persona sin su consentimiento, en principio nadie podría publicar una fotografía o imagen de otra persona en las redes sociales sin el consentimiento expreso del titular, exceptuando el caso de personas de relevancia pública, respecto de imágenes tomadas en lugares y momentos públicos. En caso de que se publiquen videos o fotografías sin consentimiento de quién aparece en ellos, se podría acudir al gestor de la web donde se hayan publicado (por ejemplo, *Facebook* ofrece la posibilidad de denunciar las fotos, permitiendo tanto “desetiquetarse” de la misma, como pedir que ésta sea eliminada), o a los Tribunales, para que la fotografía sea retirada y, si procede, se indemnicen los daños y perjuicios causados. Para calcular la cuantía de la indemnización se tendrá en cuenta la especial gravedad que la intromisión alcanza cuando se utiliza Internet, debido a que las posibilidades de difusión de la imagen en este medio son muy altas³¹. En todo caso, las personas ajenas a la red pueden aparecer en fotografías o videos no sólo sin su consentimiento, sino incluso ignorándolo. En estos casos, los afectados contarían con una protección en el ámbito civil, así como en el penal en el supuesto de que se hubiese llegado a cometer un delito contra el derecho a la propia imagen.

³⁰ STC 81/2001, de 26 de marzo (LA LEY 3383/2001).

³¹ www.abogares.com/?p=567

En cuanto a la utilización en otros ámbitos ajenos a la red social de las imágenes publicadas, el problema viene dado fundamentalmente porque algunas redes sociales introducen en sus términos de uso una declaración por la cual el usuario concede licencia a la empresa que gestiona la red para utilizar cualquier contenido de propiedad intelectual (donde estarían incluidos fotografías y vídeos) que se publique en ella. Así, respecto de aquellas imágenes introducidas por el propio usuario, se entendería que existe consentimiento para que puedan ser utilizadas por la empresa en otros ámbitos, de manera que se descarta una intromisión en el derecho a la propia imagen. Sin embargo, ese consentimiento no se da si otra persona, y no el afectado, es quien ha publicado las fotografías o los vídeos.

En todo caso, cabe la posibilidad de revocar el citado consentimiento y, en este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar a la empresa que gestiona datos la retirada de fotografías. El tema se planteó en relación a *Google*, pero la solución que ha dado el Tribunal puede aplicarse a cualquier motor de búsqueda³².

Por otro lado, es discutible que en el supuesto de que el titular del derecho a la propia imagen retire su consentimiento, se pueda obligar a alguien que ha compartido una imagen previamente “subida” a retirarla, pues esa tercera persona no tiene por qué conocer que éste ha retirado su consentimiento³³.

2.4. Protección civil de la violación de los derechos de la personalidad a través de las redes sociales. Reparación de la intromisión

La protección civil de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen se contempla en la LOPDH. Entre las intromisiones ilegítimas que pueden sufrir estos derechos a través de las redes sociales destacan los siguientes supuestos³⁴:

- La utilización de mecanismos que permita acceder a los mensajes o contenidos privados de un usuario, su registro y su reproducción

³² STJUE de 13 de mayo de 2014, as. C-131/12, *Google Spain SL y Google Inc. vs. Agencia española de Protección de Datos (AEPD)* y *Mario Costeja González* (LA LEY 51150/2014).

³³ <http://es.lexdir.com/guia/proteccion-de-la-propia-imagen-la-intimidad-y-el-honor-en-internet-2174/>

³⁴ ÁLVAREZ HERNANDO, J., “Internet, redes sociales...”, op. cit., p. 854.

- La publicación de hechos de la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y la difusión del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales.
- La divulgación de fotografías de una persona en lugares o momentos de su vida privada, sin consentimiento previo.
- La publicación de comentarios que lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estima.

El artículo 9.1 LOPDH establece que “la tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos a que se refiere la presente Ley podrá recabarse por las vías procesales ordinarias o por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución, y dispone que “también podrá acudir, cuando proceda, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.

Por su parte, el artículo 9.2 LOPDH señala que para lograr la adecuada tutela de la persona afectada podrán adoptarse todas las medidas para poner fin a la misma y, en particular, las necesarias para³⁵:

- El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, declarando la intromisión sufrida, cesando inmediatamente la misma y reponiendo el estado anterior. Si la intromisión afecta al derecho al honor, el restablecimiento del derecho incluirá la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión que tuvo la intromisión sufrida³⁶. En el ámbito de Internet, la publicación de la sentencia no supone problema ninguno, dado que ésta se puede publicar en formato *pdf* o similar³⁷.
- Prevenir intromisiones posteriores.
- Indemnizar los daños y perjuicios causados. El artículo 9.3 LOPDH dispone que “la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima”. Para valorar los daños morales habrá que atender a las circunstancias

³⁵ CONTRERAS NAVIDAD, S., *La protección del Honor, la Intimidad y la Propia Imagen en Internet*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 99 y 100.

³⁶ Aunque la medida de publicación de la sentencia está contemplada para supuestos de intromisión en el derecho al honor, el art. 9.2 no establece un *numerus clausus*, de manera que se entiende que se puede adoptar también para supuestos de intromisión en el derecho a la intimidad y a la propia imagen.

³⁷ En este sentido, véase ST Juzgado de Primera Instancia de Pamplona de 11 de octubre de 2012, donde se condena a una ex concejal de UPN a publicar un texto en su cuenta de *Twitter*, declarando que ciertos *tuits* que había escrito vulneraban el honor de otra concejal.

del caso y a la gravedad de la lesión producida, para lo que se tendrá en cuenta la difusión del medio utilizado y el beneficio obtenido por el infractor. En el ámbito de las nuevas tecnologías, la difusión es amplia y rápida, lo incrementa la gravedad de la lesión causada.

- La apropiación del perjudicado del lucro obtenido por la intromisión en sus derechos.

2.5.La responsabilidad del prestador de servicios

Ante la intromisión en el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen, el responsable será el autor de la misma. Pero, podemos preguntarnos qué ocurriría si no podemos identificar al autor real; lo que es relativamente frecuente si, por ejemplo, se ha actuado utilizando un perfil falso. El legislador, en la citada LSSICE, consciente de la dificultad de localizar a los autores de este tipo de vulneraciones en Internet, ha regulado la responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Pero, conforme a los artículos 13 a 17 LSSICE, el prestador de servicios sólo responderá cuando modifica o participa en la transmisión de la información; o cuando, teniendo conocimiento efectivo de la existencia de una resolución dictada por un órgano competente donde se establece la ilicitud de la misma o la existencia de lesión, no hubiera actuado con diligencia para retirar esos datos³⁸.

Ahora bien, como señala la SAP de Madrid de 23 de noviembre de 2010, “siendo estos los dos únicos supuestos contemplados expresamente en la ley, sin embargo, una interpretación extensiva de la misma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil, conduce a incluir, dentro de la responsabilidad del prestador del servicio, aquellos supuestos en los que el prestador del servicio incumple con su obligación de información actualizada, impuesta en el artículo 20 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de tal manera que impida al perjudicado ponerse en contacto con el prestador del servicio para reclamarle la retirada del mensaje o dato que considere atentatorio a su derecho fundamental”.

Continúa señalando la citada SAP que también se extenderá a “aquellos otros supuestos en los que, habiendo cumplido el prestador del servicio con su obligación de

³⁸ Vid. CONTRERAS NAVIDAD, S., *La protección del Honor...*, op. cit., pp. 134 y 136.

información actualizada, el perjudicado se hubiera puesto en contacto con el prestador del servicio reclamándole que retirase el mensaje o dato que considere atentatorio a su derecho fundamental y no hubiere actuado con diligencia para retirar esos datos, haciendo imposible el acceso a los mismos, siempre que se trate de un quebranto del derecho fundamental del perjudicado que sea indiscutible, claro y fragante, pues, de no ser así, no respondería aunque el remitente del mensaje fuera o debiera ser condenado por intromisión ilegítima en el derecho fundamental del perjudicado (lo que no permite la ley es que se convierta el prestador del servicio en Juez de los contenidos de su portal de Internet)»³⁹.

El principal problema se encuentra en determinar qué debe entenderse por “conocimiento efectivo”. Se considera que el prestador de servicios tiene *conocimiento efectivo* cuando exista un apercibimiento o resolución del órgano competente declarando la ilicitud de los datos o la existencia de la lesión, siempre que el prestador de servicios conozca dicha resolución. Por tanto, un prestador de servicios no respondería frente al afectado que se hubiera puesto en contacto con él solicitándole la retirada de la información y no procediera a ello.

Distinto sería que el prestador decidiera retirar los contenidos voluntariamente, en base a las condiciones de uso del servicio. En estos casos, el prestador del servicio actuaría en atención a sus políticas de uso, pero no porque estuviera obligado a ello legalmente⁴⁰.

En todo caso, el significado de la expresión “conocimiento efectivo” sigue perfilándose, a medida que se interpreta y aplica a cada caso concreto. Así, por ejemplo, en la SAP Badajoz 280/2010, de 17 de septiembre⁴¹ se hizo responsable al prestador del servicio atendiendo, no a la existencia del citado apercibimiento o resolución, sino a la finalidad de la página web, que era la de recibir sugerencias y opiniones, de manera que se entendió que quienes eran titulares de la página examinaban su contenido y, por tanto, lo conocían⁴².

³⁹ SAP Madrid 526/2010 de 23 de noviembre (LA LEY 256810/2010).

⁴⁰ GONZÁLEZ TAPIA, M.L., “Responsabilidad de prestadores de servicios de la sociedad de información: comentario de la sentencia “Telecinco” contra “Youtube”, *Noticias Jurídicas*, 2011, www.noticias.juridicas.com

⁴¹ SAP Badajoz 280/2010 de 17 de septiembre (LA LEY 153332/2010).

⁴² CONTRERAS NAVIDAD, S., *La protección del Honor...*, op. cit., pp. 134 y 136.

3. Derechos de personalidad del menor. Intromisiones ilegítimas en Internet.

3.1.Consideraciones generales

En la sociedad de la información y, en particular, en las redes sociales, el colectivo más sensible y vulnerable es el de los menores.

Como señala TRONCOSO REIGADA, “nos hallamos ante una generación de jóvenes que no sólo utilizan las nuevas tecnologías, sino que viven en ellas y comparten ahí novedades, experiencias y vivencias personales”⁴³. El último informe realizado por la Fundación Telefónica señala que ya son 26,25 millones de españoles los que acceden regularmente a Internet. De ellos, un 67,1% utiliza las redes sociales, siendo los jóvenes de 16 a 24 años los internautas que más usan estos portales (91,3%)⁴⁴.

Estos menores que, desde que tienen uso de razón se rodean de ordenadores, *smartphones*, *tablets* y que, en general, crecen en un entorno digital, son los denominados, en palabras de PRENSKY “nativos digitales”, frente a los “inmigrantes digitales”, que no nacieron en un mundo digital, sino que se incorporaron más tarde al mismo⁴⁵. Esta distinción tiene como consecuencia la denominada “brecha digital”, que permite comprender las dificultades de los padres para entender y educar en un uso responsable y prudente de las herramientas tecnológicas y, en consecuencia, el exceso de confianza y la falta de conciencia de los jóvenes sobre la importancia de ocultar su información personal⁴⁶. Así, cada vez es más frecuente que sean los propios menores quienes proporcionan datos sobre su intimidad y la de otros o difunden imágenes propias y ajenas, sin consentimiento, ni de los menores ni de sus representantes legales. En este sentido, cabe preguntarse si los menores tienen la suficiente capacidad para entender el alcance de muchos de los actos que realizan a través de Internet y de las redes sociales.

En todo caso, a pesar de la facilidad que muestran los menores de edad para desenvolverse en el ámbito de las nuevas tecnologías (donde interactúan con sus

⁴³ TRONCOSO REIGADA, A., “Las redes sociales y la APDCM”, *Revista datospersonales.org*, núm. 43, 2010.

⁴⁴ <http://saladeprensa.telefonica.com/jsp/base.jsp?contenido=/jsp/notasdeprensa/notadetalle.jsp&id=0&idm=es&pais=1&elem=21187>

⁴⁵ PRENSKY M., “Digital Natives, Digital Immigrants”, *MCB University Press*, vol. 9, núm. 5, 2001.

⁴⁶ HERRÁN ORTIZ, A.I., “Las redes sociales digitales: ¿hacia una nueva configuración en los derechos fundamentales en Internet?”, *Revista Vasca de Administración Pública*, 2010, p. 550.

amigos, se comunican mediante mensajes instantáneos, comparten imágenes, videos, música, etc.) están expuestos a importantes peligros. De hecho, si ya en cualquier ámbito el menor merece una protección especial, más aún en Internet, dado que la globalidad e inmediatez de la Red hace que las conductas que realizan en el ámbito virtual tengan una mayor difusión⁴⁷.

3.1.1. Principios que inspiran la normativa sobre protección del menor

El principio jurídico más importante que rige la normativa sobre protección del menor es *el interés superior del menor*, consagrado en el artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y confirmado con posterioridad en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, constituye también un principio constitucional, derivado del artículo 39 CE, en relación con el art. 10 CE.

El interés superior del menor implica primar el beneficio del menor frente al de los padres, tutores, curadores o administraciones públicas⁴⁸. La existencia de este principio se justifica por la idea de que el menor, al no haber alcanzado plena madurez física y psicológica, requiere mayor protección que un adulto.

En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que los menores de edad son titulares de los derechos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de sujetos. En particular, y con relación al tema que estamos tratando, según el art. 4.1 LOPJM⁴⁹ los menores de edad gozan del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. No obstante, como ha señalado el Grupo de Trabajo de Protección de Datos⁵⁰, si el honor, la intimidad o la propia imagen entran en conflicto con el interés superior del menor, los derechos de la personalidad pueden verse limitados cuando así lo exija el interés superior. Así sucede, por ejemplo, con respecto a datos médicos o escolares en casos de abuso o abandono de menores.

⁴⁷ LORENTE LÓPEZ, M.C., “La vulneración de los derechos...”, op. cit., p. 208.

⁴⁸ ALONSO PÉREZ, M., “La situación jurídica del menor en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Luces y sombras”, *Actualidad Civil*, núm. 1, 1997, p. 24.

⁴⁹ El artículo 4.1. LOPJM dispone que “los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como el secreto de las comunicaciones”.

⁵⁰ GRUPO DE TRABAJO DE PROTECCIÓN DE DATOS: Informe 1/08, sobre protección de los datos personales de los niños. Directrices generales y el caso especial de los colegios, 18 de febrero de 2008, p. 5.

Se ha de tener en cuenta que el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor, como ocurre con otros derechos de la personalidad, en muchos casos tienen que ser ejercitados por sus representantes legales, pero sin olvidar que, ante un conflicto entre el interés del menor y los deseos de los padres titulares de la patria potestad o de los representantes legales, prevalecerá igualmente la solución que resulte más acorde con el interés del menor.

Ahora bien, es importante recordar que otro de los principios que inspira nuestro ordenamiento jurídico es el derecho del menor a decidir y ejercer los derechos relativos a su personalidad en función de su grado de madurez. Implica que, gradualmente, a medida que los menores de edad crecen, se les debe ir reconociendo un mayor ámbito de participación en la toma de decisiones de carácter personal que les afecten directamente. El primer nivel de este derecho es el derecho a ser consultado, que implica tener en cuenta las opiniones del niño, y a medida que el grado de madurez del menor aumenta (en torno a los catorce o dieciséis años), su participación puede dar lugar a una decisión conjunta (entre el menor y sus representantes legales) o incluso a permitir al menor tomar una decisión por sí solo⁵¹.

3.2. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor en la Red.

El artículo 1.3 LOPDH establece que “el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible”, y que “la renuncia a la protección prevista en esta ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento a que se refiere el artículo segundo de esta ley”

En este sentido, respecto de los menores, el artículo 3 LOPDH, en relación con los artículos 154.3, 156.2 y 162 CC, permite que los menores con madurez suficiente autoricen, prestando previamente su consentimiento, una intromisión en sus derechos de la personalidad. Mientras que cuando se aprecie que el menor carece de madurez suficiente, el consentimiento lo deberán prestar sus representantes legales, por escrito y previo conocimiento del Ministerio Fiscal, que puede oponerse a la intromisión en el plazo de ocho días. En caso de que efectivamente el Ministerio Fiscal se oponga, tendrá que resolver el juez.

⁵¹ Dictamen 2/2009 sobre la protección de los datos personales de los niños (Directrices generales y especial referencia a las escuelas) de 11 de febrero de 2009, pp. 4-7.

Ahora bien, la LOPJM ha reducido los supuestos en los que tanto el menor como sus representantes legales pueden consentir actos de disposición respecto a los derechos de la personalidad. Así, el artículo 4.3 LOPJM elimina la posibilidad de consentimiento cuando se utiliza la imagen o el nombre del menor en los medios de comunicación y ello puede implicar menoscabo de su honor o reputación, o sea contrario a sus intereses, de manera que, en estos casos, la intromisión siempre se considerará ilegítima.

Una buena parte de la doctrina ha ido incluso más allá y ha defendido la indisponibilidad absoluta del derecho al honor del menor, basándose en tres argumentos:

En primer lugar, en la idea de que el derecho al honor no puede ser objeto de tráfico jurídico porque no tiene contenido patrimonial⁵².

En segundo lugar, alegan que es dudoso que el menor tenga capacidad para prestar un consentimiento libre y consciente para autorizar intromisiones ilegítimas a sus derechos fundamentales. Además, el artículo 4.3 LOPJM establece que el consentimiento que suponga menoscabo de la honra o reputación del menor o sea contrario a su interés no surtirá efecto. En este sentido, como indica HERAS HERNÁNDEZ es difícil imaginar “un solo supuesto en el que la autorización de la divulgación de manifestaciones difamatorias que vulneren la dignidad del menor pueda repercutir en su beneficio”⁵³.

En tercer y último lugar, este sector de la doctrina señala que en el caso de que sea el representante legal del menor quien otorgue el consentimiento, tampoco este consentimiento les parece válido. Se amparan en que la representación ejercida por los padres o tutores forma parte de las facultades inherentes a la patria potestad o a la tutela, de manera que debe ejercerse en beneficio del menor (artículos 154 y 216 CC). En este sentido, el consentimiento a una intromisión en el derecho al honor afecta a la consideración social y a la propia estima de la persona, de forma que la disposición del derecho al honor del menor por los representantes legales podría resultar contraria al interés del menor. Además, el artículo 4.5 LOPJM declara que los padres, tutores y poderes públicos deben respetar este derecho y proteger al menor frente a posibles ataques provenientes de terceros, de modo que proteger el honor del menor es un deber

⁵² SANTOS MORÓN, M.J., *Incapacitados y derechos de la personalidad: tratamientos médicos, honor, intimidad e imagen*, Escuela libre, Madrid, 2000, p. 183.

⁵³ HERAS HERNÁNDEZ, M.M., “Internet y el derecho al honor de los menores”, *Revista Ius*, 2012, p. 100.

de los representantes legales, que se vería incumplido si autorizaran intromisiones ilegítimas en el mismo⁵⁴.

Podríamos considerar, por tanto, que no resulta acertado que el legislador regule conjuntamente el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y que deberíamos entender que, cuando el artículo 1.3 LOPDH establece que la renuncia a la protección prevista por esta ley a favor de los derechos de la personalidad es nula, se refiere solo al derecho al honor. Por su parte, la posibilidad de que el titular de estos derechos autorice intromisiones en los mismos, se refiere únicamente a la intimidad y a la propia imagen⁵⁵.

Además, es importante destacar los problemas de aplicación que presenta el artículo 3 LOPDH al no precisar cuándo puede considerarse que un menor goza de madurez suficiente para consentir, qué actuaciones deben seguirse para comunicar al Ministerio Fiscal el consentimiento prestado por los padres, o qué criterios se deben tener en cuenta para oponerse al mismo.

A este respecto, cabe destacar la Instrucción 2/2006 de 15 de marzo, de la Fiscalía General del Estado, sobre el Fiscal y la protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen de los menores, en la que se establece la necesidad de valorar las circunstancias de cada caso concreto, “en función de la edad, del desarrollo emocional, intelectual y volitivo del concreto menor y de la complejidad del acto de que se trate”.

Por otra parte, el artículo 13 RDLOPD fija el límite de edad en los catorce años, de manera que prohíbe a los prestadores de servicios recabar información de datos de menores de catorce años sin autorización de sus representantes legales. Esto implica que, para que el menor pueda registrarse como usuario y proporcionar los datos que las plataformas exigen, es necesario que, o bien sea mayor de catorce años, o bien cuente con el consentimiento de sus representantes legales. No obstante, la AEPD ha señalado que un gran número de personas menores de catorce años están presentes en redes

⁵⁴ LAMA AYMÁ, A., *La protección de los derechos de la personalidad del menor de edad*, Tesis doctoral dirigida por María del Carmen Gete-Alonso y Calera. Universitat Autònoma de Barcelona (2005), p. 261.

⁵⁵ HERAS HERNÁNDEZ, M.M., “La protección jurídica del derecho al honor de los menores en Internet” en FLORES RODRÍGUEZ, J., JORDÁ CAPITÁN, E., MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J.A., DE PRIEGO FERNÁNDEZ, V. *Los derechos de la personalidad de los menores y las Nuevas Tecnologías*, El Derecho, Madrid, 2012, pp. 15 y 16.

sociales sin el consentimiento de sus padres o representantes legales, dado que no existen mecanismos seguros para verificar la edad del usuario que se registra.

Así, un menor de catorce años que quiera acceder a una red social, simplemente tendrá que rellenar un formulario con sus datos donde podrá sencillamente indicar una fecha de nacimiento falsa.

Tampoco es eficaz el método de control de la edad del usuario consistente en adjuntar fotocopia de DNI y enviarla por correo electrónico, pues ha provocado que los menores de edad falsifiquen su DNI mediante programas de diseño gráfico⁵⁶.

Sobre este tema se ha pronunciado la Decisión 1351/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008, que en su Considerando 12 establece que “deben desplegarse los esfuerzos necesarios para proteger a los niños mediante el desarrollo, por ejemplo, de sistemas efectivos de comprobación de edad y de etiquetas de certificación voluntarias”. Fruto de esta norma, la AEPD llegó a un acuerdo con la red social *Tuenti* para eliminar los perfiles de menores de 14 años. La medida consistió en solicitar a los usuarios sospechosos de ser menores de 14 años que aportaran en un plazo de 92 horas la información acreditativa de su edad, eliminando a todos los usuarios que no respondieron a la solicitud⁵⁷.

Probablemente una de las medidas que más ayudaría a solventar este problema de la prueba de la edad sería la implantación del DNI electrónico.

A todo esto hay que añadir que las políticas de privacidad de las distintas plataformas son más eficientes en la teoría que en la práctica. En este sentido cabe citar, por ejemplo, el caso de *Facebook*⁵⁸, que ha eliminado la restricción que impedía a los menores de edad difundir comentarios, fotos, videos, etc., más allá de sus amigos o amigos de amigos, permitiéndoles compartir la información con el público en general.

⁵⁶ Dado que la red social recibe un escaneo o fotocopia, es más difícil comprobar la veracidad de la fecha de nacimiento. BELTRÁN CASTELLANOS, J.M., “Aproximación...”, op. cit., p. 78.

⁵⁷ DE PRIEGO FERNÁNDEZ, V., “La protección jurídica del derecho a la intimidad de los menores en la red”, en FLORES RODRÍGUEZ, J., JORDÁ CAPITÁN, E., MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J.A., DE PRIEGO FERNÁNDEZ, V. *Los derechos de la personalidad...* op. cit., pp. 70 y 71.

⁵⁸ LORENTE LÓPEZ, M.C., “La vulneración de los derechos...”, op. cit., p. 212.

3.2.1. Derecho al honor

El derecho al honor ampara la buena reputación del menor frente a expresiones o imágenes que menoscaben su honra o provoquen su descrédito o desprestigio.

Así, entre las actuaciones que constituyen vulneraciones al derecho al honor del menor a través de Internet y, especialmente, de las redes sociales, cabe citar las siguientes⁵⁹:

- Divulgar manifestaciones de cualquier tipo a través de redes sociales, foros, blogs, correos electrónicos, móviles, que provocan el menosprecio del menor frente a los demás.
- Proferir insultos, comentarios vejatorios, injurias u opiniones innecesarias para el mensaje que se quiere transmitir.
- Divulgar contenidos falsos con la finalidad de denigrar al menor.
- Difundir datos falsos sobre hechos delictivos.
- Organizar actividades que atenten contra la dignidad del menor, como concursos para votar a un menor como el más raro o el más feo.
- Crear perfiles falsos, incluyendo información verdadera o falsa sobre el menor para perjudicar su estima.
- Facilitar imágenes del menor en situaciones comprometidas para denigrarle públicamente, a través de plataformas como *Youtube*, *Tuenti*, *Facebook* o *Twitter*.
- Realizar y divulgar fotomontajes donde aparezca un menor, perfectamente identificado, en situaciones denigrantes o que lo ridiculizan.

3.2.2. Derecho a la intimidad

Con la aparición de Internet, “el derecho a la intimidad ya no es tanto el derecho a decidir sobre la no divulgación de los aspectos más íntimos de la persona, sino el derecho al anonimato en Internet, entendido como el derecho a que no sean revelados datos personales ni imágenes sin el consentimiento del afectado ni para otras actividades que las autorizadas”⁶⁰.

⁵⁹ HERAS HERNÁNDEZ, M.M., *Los derechos de la personalidad...* op. cit., pp. 18 y 19.

⁶⁰ DE URBANO CASTRILLO, E., “Derechos de la personalidad e Internet”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 9/2010, p. 44.

El principal problema que se plantea respecto a la intimidad de los menores en las redes sociales es el enfrentamiento entre el ejercicio de la patria potestad por parte de los padres, y el derecho a la intimidad del menor, especialmente ante prácticas extendidas entre los progenitores, como crear un perfil falso y adherirse a la cuenta de sus hijos. Es importante tener en cuenta que los padres tienen la obligación de respetar la intimidad de los menores y, al mismo tiempo, la obligación de velar por ellos y protegerlos (artículo 154 CC).

La patria potestad es una institución orientada a la protección del menor y las facultades otorgadas a los padres sólo tienen sentido si están dirigidas a lograr ese objetivo, de forma que si el menor no requiere tal amparo, la intervención de los padres no estaría justificada. Esto implica que el acceso a la información personal de los menores sólo está permitido cuando sirva de mecanismo para ejercer la citada asistencia.

A este respecto, aunque ninguna norma establece una prohibición expresa ante este tipo de actitudes, tampoco parece que las ampare, puesto que la participación de los padres en la red no tendría como fin el intercambio de impresiones con los participantes, sino el control de los menores, puesto que se estaría empleando Internet para lograr un acceso a información personal del menor, sin el consentimiento de éste. Cuando se trata de un menor de catorce años, los padres o tutores no necesitan el consentimiento de su hijo para acceder a la información. Sin embargo, en el caso de menores mayores de catorce años, éstos pueden negarse a tal acceso⁶¹. En estos casos, cuando la red social sea abierta o esté así configurada, si el menor difunde su propia información en Internet, el acceso al perfil por parte de los padres no supondría afectación a la intimidad. Por el contrario, si la red es cerrada, los padres no podrían acceder a la misma, salvo que el menor lo consienta.

Como ya hemos indicado, cuando el interés del menor y su derecho a la intimidad entran en conflicto, el derecho a la intimidad puede ceder a favor interés del menor. Sin embargo, esta solución solo debe operar en casos de gravedad. Por ello, se deben establecer los medios oportunos para que la libertad y la personalidad del menor se

⁶¹ MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J.A., “La utilización y protección jurídico-civil de la imagen de los menores en la red; aspectos legales y de praxis judicial” en FLORES RODRÍGUEZ, J., JORDÁ CAPITÁN, E., MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J.A., DE PRIEGO FERNÁNDEZ, V. *Los derechos de la personalidad...* op. cit., pp. 130 y 131.

desarrollen con el menor número de limitaciones posibles y que éstas se reduzcan a lo estrictamente necesario para garantizar la seguridad del menor⁶².

3.2.3. Derecho a la propia imagen

La Constitución Española no hace alusión a un derecho a la propia imagen del menor diferente del derecho a la propia imagen de cualquier persona. Así, el derecho a la propia imagen del menor puede definirse, conforme a lo que ha venido señalando el Tribunal Constitucional, como el derecho tanto a consentir como a impedir la captación, reproducción o publicación de su figura. En todo caso, el Tribunal Supremo, en la STS de 13 de julio de 2006⁶³ estableció que “el derecho a la propia imagen está protegido constitucionalmente, pero la imagen del menor tiene una consideración legal especialmente protectora”.

Las cuestiones más problemáticas en torno al derecho a la propia imagen del menor son fundamentalmente dos: el ejercicio que los menores pueden hacer de su derecho a la imagen y la utilización por terceros de la imagen del menor sin consentimiento.

Conforme a la LOPDH, como hemos visto anteriormente, cualquier persona (tanto menor como adulto) que publique en las Red imágenes de menores de edad requerirá el consentimiento del menor, si éste goza de madurez suficiente o bien el consentimiento por escrito de su representante legal. Ahora bien, dicho consentimiento carecerá de validez si se utiliza la imagen o el nombre del menor en los medios de comunicación y ello implica menoscabo de su honra o reputación, o es contrario a sus intereses (artículo 4.3 LOPJM).

Actualmente, uno de los principales riesgos en torno a la imagen del menor se produce porque es frecuente que sean los propios padres los que publican las fotografías de sus hijos, a veces acompañados incluso por otros menores de edad. En este último caso, los padres que publican este tipo de fotos necesitarían el consentimiento expreso de los padres o tutores legales del resto de menores que no son sus hijos, teniendo en cuenta que ese permiso puede ser revocado en cualquier momento⁶⁴.

⁶² PÉREZ LUÑO, A.E., “La protección de datos personales del menor en Internet” *Anuario de la Facultad de Derecho*, núm. 2, 2009, p. 171.

⁶³ STS de 13 de julio de 2006 (LA LEY 70229/2006).

⁶⁴ <http://www.menoresenred.com/legislacion-imagen-menores-internet/>

En cuanto a los padres que “suben” a las redes sociales imágenes de sus propios hijos menores de catorce años, a pesar de estar autorizados a ello, por ser sus representantes legales, no cabe una difusión de fotografías o vídeos indiscriminada ni contraria al interés del menor, pues no se puede olvidar que las obligaciones inherentes a la patria potestad, obligan a los padres a actuar en todo momento en beneficio del menor. En este sentido, las consecuencias a que pueden dar lugar este tipo de publicaciones en Internet y en las redes sociales pueden ser de lo más variado: desde acoso escolar o ciberbullying, manipulación fotográfica o acceso posterior por empresas o incluso por terceros con finalidades delictivas; de manera que podemos encontrarnos con vulneraciones, no sólo del derecho a la propia imagen, sino también del derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la protección de datos, y que pueden acabar teniendo hasta repercusión en el ámbito penal⁶⁵.

Además, tampoco sería posible que uno de los progenitores colgara fotos de sus hijos menores en Internet sin consentimiento de otro progenitor titular de la patria potestad, pues se precisa la autorización de ambos padres, teniendo en cuenta que la cuestión está encuadrada dentro de la esfera de la patria potestad, de forma que, mientras ésta sea compartida, debe contarse con la aprobación y consentimiento de ambos⁶⁶.

Por lo que respecta a progenitores que no conviven juntos o que están separados o divorciados, cuando uno de los progenitores no desea que el otro publique la imagen de su hijo en la red social, y cree además que esa publicación podría colocar a su hijo en una situación grave de desprotección, el titular de la patria potestad dispone de varias vías de actuación para intentar evitar la publicación de las fotos de su hijo⁶⁷:

a) Si la cuestión se ha regulado expresamente en el convenio regulador que ha sido aprobado judicialmente, se puede acudir a la vía de ejecución de sentencia, pudiendo también solicitar medidas cautelares al respecto, con la retirada inmediata de esas imágenes

b) En todo momento, existe la posibilidad de acudir al procedimiento previsto en el artículo 156.2 CC, que establece la posibilidad de solicitar al juez que atribuya a uno de

⁶⁵ GIL ANTÓN A.M., “La privacidad del menor en Internet”, *Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS)*, núm. 3, 2013, p. 90.

⁶⁶ <https://derechofamilia.wordpress.com/2010/04/26/a-vueltas-con-la-patria-potestad-fotos-y-redes-sociales/>

⁶⁷ <https://zinetik.com/los-conflictos-entre-padres/>

los dos progenitores la facultad de decidir sobre alguna cuestión concreta relativa al ejercicio de la patria potestad, como sería en este caso la publicación de imágenes del menor. El juez deberá oír al menor si tuviera suficiente juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce años.

c) Igualmente cabría recurrir a la vía que contempla el artículo 158 CC, que permite al juez dictar las medidas oportunas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios. Esta vía podría ponerse en marcha tanto de oficio como a iniciativa del propio menor, cualquier pariente o el Ministerio Fiscal.

3.3. Posibles medidas ante la vulneración de los derechos de la personalidad del menor en Internet

La LSSCIE regula distintos mecanismos orientados a proteger los derechos del menor vulnerados en la red.

Conforme al artículo 30 de la LSSICE, si se identifica en una página contenidos contrarios al honor, intimidad o imagen del menor, cabe interponer una acción de cesación de la actividad. Están legitimados para iniciar dicha acción cualquier persona física o jurídica titular de un derecho o interés legítimo, grupos de consumidores y usuarios y sus asociaciones públicas o privadas y el Ministerio Fiscal (artículo 31 LSSICE).

En relación a los menores de edad, debe entenderse que pueden interponer la acción de cesación⁶⁸: los representantes legales del menor, cuyos derechos hayan sido lesionados; las instituciones públicas o privadas de protección del menor, o las asociaciones que tengan relación con los menores por lo que ostenten un interés legítimo en su protección, como Asociaciones contra la pornografía infantil.

Además, el artículo 41 LSSICE prevé la posibilidad de recurrir a una serie de medidas provisionales, entre las que se encuentran: la suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y, en su caso, cierre provisional de sus establecimientos; el precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos informáticos y de documentos en general, así como de aparatos y equipos informáticos de todo tipo; o la posibilidad de advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de

⁶⁸ LAMA AYMÁ, A., *La protección de los derechos...* op. cit., p. 329.

la incoación del expediente sancionador de que se trate, así como de las medidas adoptadas para el cese de dichas conductas.

Además de estas medidas, podrá instarse una reclamación de daños y perjuicios por vulneración del honor, la intimidad o la propia imagen del menor, e igualmente, podrá interponerse, en su caso, una acción penal. Ahora bien, conforme al artículo 44 LSSICE estas acciones no serán compatibles con las sanciones económicas previstas en esta ley.

3.4. El menor de edad y los *smartphones*: el *WhatsApp*.

En la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares (2014), el Instituto Nacional de Estadística ha concluido que casi un 70% de los niños entre diez y quince años dispone de teléfono móvil.

Los teléfonos móviles que ofrecen más funciones que un teléfono móvil común se denominan *smartphones* o teléfonos inteligentes. Son teléfonos móviles que disponen de un *hardware* y un sistema operativo propio, de manera que, además de permitir realizar y recibir llamadas y mensajes telefónicos, también tienen la capacidad de llevar a cabo funciones semejantes a las realizadas por los ordenadores. Así, entre otras funciones, disponen de cámara de fotos, conexión a Internet, aplicaciones de organización personal (calendario, alertas, bloc de notas...), de lectura y de edición de archivos de vídeo y música⁶⁹.

Evidentemente, los menores que disponen de un *smartphone* tienen más riesgos que los que usan móviles más antiguos, puesto que a través de los teléfonos inteligentes pueden acceder a Internet con mayor facilidad y realizar una gran cantidad de actividades, como descargar aplicaciones, jugar o escuchar música *online*.

Entre los peligros que supone el uso de *smartphones* destacan los siguientes⁷⁰: la adicción y el uso excesivo o la dependencia del teléfono; el acceso a contenidos inapropiados (acceso a imágenes de contenido sexual, racista o violento); el acoso sexual (*grooming*), el acoso escolar (*bullying*) y los mensajes sexuales (*sexting*); el riesgo económico o fraude que se concreta principalmente en el envío de mensajes para participar en promociones o descargar aplicaciones, música o imágenes, resultando más

⁶⁹ www.quees.info/que-es-un-smartphone.html

⁷⁰ INTECO y France Telecom España (Orange), “Estudio sobre hábitos seguros en el uso de *smartphones* por los niños y adolescentes”, 2011, pp. 10 a 12.

caro de lo previsto; riesgos de carácter técnico, que incluye virus, *spam*, o *phishing* y, finalmente, riesgos relacionados con la privacidad del menor, referido a actuaciones como el robo de contraseñas, el uso de información personal o la difusión de imágenes propias o de terceros.

Dentro de las novedosas aplicaciones disponibles a través de los *smartphones* merece especial atención el sistema de mensajería instantánea *WhatsApp*. Conforme al estudio realizado por el Centro de Seguridad en Internet para los Menores en España: PROTÉGELES⁷¹, un 76% de los niños y adolescentes de once a catorce años de edad utiliza *WhatsApp* habitualmente.

El principal problema de esta aplicación es que, a pesar de presentarse como un servicio de mensajería instantánea, funciona como una red social, que permite crear grupos, enviar imágenes, vídeos e información. Sin embargo, no está registrada como red social, de manera que tampoco está obligada a cumplir con las normas que se exigen a otras redes sociales como *Facebook* o *Twitter*, ni está controlada por los Gobiernos, la industria o la Unión Europea.

A estos problemas se añade, en el caso de los menores, el tema de la edad. Conforme al artículo 13 RDLOPD, un menor de catorce años no puede prestar consentimiento para que se obtengan sus datos personales o su imagen, porque es necesaria la autorización de sus padres o representantes legales. Sin embargo, dado que *WhatsApp* no está sometido a ningún tipo de supervisión, los menores de catorce años pueden darse de alta y proporcionar una multitud de datos, como su nombre, su fotografía o su localización geográfica, sin ningún tipo de requisito adicional.

Esta situación se agrava por dos circunstancias adicionales: la inmediatez que ofrece la aplicación, que trae consigo la toma de decisiones rápidas y poco meditadas por parte de los menores y el hecho de que *WhatsApp* se ha convertido en la herramienta más habitual de ciber-acoso, de manera que se emplea habitualmente para acosar, amenazar o difundir fotografías sin autorización⁷².

Además, existe cierta desinformación en torno a la actuación de la compañía: dónde se almacenan las imágenes y la información enviada, si guardan copias de las

⁷¹ CENTRO DE SEGURIDAD EN INTERNET PARA LOS MENORES EN ESPAÑA: PROTÉGELES, “Menores de Edad y Conectividad Móvil en España: *Tablets y Smartphones*”, 2014, p. 12.

⁷² LORENTE LÓPEZ, M.C., “La vulneración de los derechos al honor...”, op. cit., pp. 213 y 214.

conversaciones mantenidas por los usuarios y, en general, el nivel de seguridad que ofrecen a sus clientes.

3.5. Consideraciones finales

El uso inadecuado de las nuevas tecnologías, y en particular de las redes sociales, puede implicar grandes riesgos para los derechos de los menores de edad, pudiendo llegar a ponerse en peligro su desarrollo, tanto físico como psicológico. Para evitar estos inconvenientes se han previsto mecanismos jurídicos, tanto en el orden civil como en el penal. No obstante, las actuales normas y fundamentalmente la LOPJM, se han mostrado insuficientes.

Como consecuencia de que actualmente el ordenamiento jurídico no ofrece una protección jurídica eficaz, va a ser fundamental sensibilizar y formar tanto a los menores como a los padres o tutores, para concienciarles acerca de los peligros que implica el uso de la red y de las posibilidades de las que disponen en caso de que sufran cualquier intromisión a sus derechos.

Desde el punto de vista legal, los esfuerzos realizados hasta el momento no han surtido los efectos debidos, por lo que es necesario mejorar la regulación existente. Creemos que se debe reforzar la protección de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores, tratando de impedir el acceso de los mismos a contenidos ilícitos, así como la divulgación de cualquier tipo de dato que pueda perjudicar el libre desarrollo de su personalidad. En este sentido, sería fundamental establecer procedimientos que permitan verificar la edad de los menores, o implementar medidas para poner en conocimiento de los padres o de los representantes legales las posibles vulneraciones de los derechos de la personalidad del menor.

CONCLUSIONES

PRIMERA

La aparición y el desarrollo de las Nuevas Tecnologías han supuesto importantes cambios en la vida cotidiana de la mayoría de la población y en la mayoría de los ámbitos de la sociedad. De ahí que uno de los grandes retos jurídicos del siglo XXI, aún pendiente, sea regular adecuadamente los problemas que derivan de la utilización de estos nuevos medios.

SEGUNDA

En España contamos con una amplia normativa que, a veces de un modo específico y, en ocasiones aprovechando la regulación de otras cuestiones conexas, trata de proteger los derechos de los ciudadanos que se ven expuestos a los peligros que genera Internet. Así, en torno a los servicios de la sociedad de la información destacan la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico y la Ley de Medidas para el Impulso de la Sociedad de la Información. Igualmente, es necesario hacer referencia a la Ley de Propiedad Intelectual y a la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en atención a la importancia que hoy en día ha adquirido Internet en el ámbito comercial y económico.

El problema que tenemos es que estas normas corren el riesgo de quedar obsoletas, debido a la rapidez con la que evoluciona la tecnología. Por ello, además de concienciar a los ciudadanos de las amenazas presentes en la Red, sería conveniente que las normas sobre esta materia se actualizasen en algunos aspectos si quieren proteger adecuadamente la privacidad y los derechos de la personalidad de los ciudadanos.

TERCERA

La era digital, y en particular, las redes sociales, han revolucionado el concepto de privacidad y de los derechos de la personalidad en el ámbito virtual. Tanto los derechos fundamentales a la intimidad, el honor y la propia imagen, como el derecho a la privacidad personal están siendo objeto de graves intrusiones como consecuencia de la expansión de Internet, de la aparición de nuevos servicios *online* y de la utilización de las redes sociales. Los problemas se complican dado que el internauta no es sólo un sujeto pasivo, sino que también es sujeto activo, porque difunde información, opiniones

o fotografías, posibilitando que sus actos puedan afectar los derechos de terceras personas.

CUARTA

Contamos con una amplia y variada legislación en materia de privacidad y derechos de la personalidad. Los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos recogidos en los artículos 18.1 y 18.4 de la Constitución han sido objeto de desarrollo por la LOPDH y por la LOPD. No obstante, la realidad es que existen importantes lagunas jurídicas, tal vez debidas al hecho de que en Internet “no es posible poner puertas al campo”. En este sentido, es necesario que el legislador, la doctrina, los jueces y la sociedad en general entiendan que estamos ante una nueva realidad, caracterizada por el dinamismo constante y por la aparición de nuevos retos cada día y que ello hace imprescindible adoptar medidas adaptadas a las necesidades que vayan surgiendo, porque sólo así se podrá aspirar a otorgar una adecuada protección a nuestros derechos fundamentales.

QUINTA

En el trabajo nos hemos centrado en las posibilidades que ofrece la normativa española. No obstante, hay que tener en cuenta que Internet es un fenómeno mundial, de manera que para ofrecer al ciudadano una protección eficaz de sus derechos de la personalidad se deben adoptar soluciones armónicas y comunes a nivel internacional. En este momento existen importantes diferencias entre la normativa norteamericana y la europea, pero al menos desde la Unión Europea se están haciendo esfuerzos importantes de armonización en esta materia, como se pone de manifiesto en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos de 25 de enero de 2012, dirigida a la aprobación de un Reglamento General de Protección de Datos, y que se espera sea aprobado en pocos meses.

SEXTA

Los riesgos inherentes a la utilización de las Nuevas Tecnologías preocupan especialmente cuando afectan a los menores de edad. Los jóvenes son los usuarios mayoritarios de estos servicios, están más expuestos a los riesgos y son más indefensos.

Sin embargo, en la práctica reciben un tratamiento prácticamente idéntico al de los mayores de edad, sobre todo teniendo en cuenta que no existen mecanismos eficaces para comprobar la edad del usuario, lo que dificulta su protección desde un punto de vista legal.

SÉPTIMA

En el ámbito de los menores, la LOPDH contiene disposiciones especialmente referidas a los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de los mismos, que se ven complementadas por la regulación incluida en la LOPJM. Estas normas establecen distinciones entre el menor de edad con madurez suficiente y el menor no maduro, exigiendo en este último caso la intervención de los representantes legales y del Ministerio Fiscal en las decisiones que afecten a sus derechos de la personalidad. Sin embargo, aún no se han fijado unas pautas precisas que ayuden a determinar cuándo el menor goza *de madurez suficiente* para poder actuar en este ámbito sin la necesidad de contar con el consentimiento de los padres titulares de la patria potestad o de sus representantes legales.

OCTAVA

Para proteger adecuadamente al menor es importante informarle desde pequeño acerca de los peligros que conlleva Internet y asesorarle sobre las precauciones a adoptar. No obstante, también es preciso mejorar los instrumentos jurídicos de los que disponen los propios menores o sus representantes legales. En este sentido, nos parece necesario que se adopten algunas de las siguientes medidas: introducir un mecanismo que permita verificar la edad de la persona que trata de registrarse en una red social; y obligar a los prestadores de servicios a aumentar el grado de transparencia sobre su política de privacidad, empleando un lenguaje comprensible para los menores y desarrollar aplicaciones que permitan a los padres o tutores controlar la actividad que los menores llevan a cabo a través de Internet.

BIBLIOGRAFÍA

ABRIL, P. S y PIZARRO MORENO, E., “La intimidad europea frente a la privacidad americana. Una visión comparativa del derecho al olvido” *InDret*, 2014.

ALONSO PÉREZ, M., “La situación jurídica del menor en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Luces y sombras”, *Actualidad Civil*, núm. 1, 1997, págs. 17-40.

ÁLVAREZ HERNANDO. J., CAZURRO BARAHONA, V., *Grandes Tratados. Practicum Protección de Datos*. Aranzadi, Pamplona, 2014.

APARICIO SALOM J., *Estudio sobre Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal*, Aranzadi, Pamplona, 2002.

BARRIUSO, C., “Las Redes Sociales y la Protección de Datos Hoy”, *Anuario Facultad de Derecho*, núm. II, Universidad de Alcalá, 2009, págs. 301-338.

BELTRÁN CASTELLANOS, J.M., “Aproximación al régimen jurídico de las redes sociales” *Cuaderno Electrónico de Estudios Jurídicos*, núm. 2, 2014 www.ceej.es, págs. 61-90.

CENTRO DE SEGURIDAD EN INTERNET PARA LOS MENORES EN ESPAÑA: PROTÉGELES, “Menores de Edad y Conectividad Móvil en España: *Tablets y Smartphones*”, 2014.

CONTRERAS NAVIDAD, S., *La protección del Honor, la Intimidad y la Propia Imagen en Internet*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012.

DE URBANO CASTRILLO, E., “Derechos de la personalidad e Internet”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 9/2010, págs. 43-54.

DE VERDA Y BEAMONTE, J.R., *Veinticinco años de aplicación de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2007.

FLORES RODRÍGUEZ, J., JORDÁ CAPITÁN, E., MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J.A., DE PRIEGO FERNÁNDEZ, V. *Los derechos de la personalidad de los menores y las Nuevas Tecnologías*, El Derecho, Madrid, 2012.

GIL ANTÓN, A.M, *¿Privacidad del menor en Internet?*, Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona, 2015.

- “La privacidad del menor en Internet”, *Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS)*, núm. 3, 2013, págs. 60-96.

GONZÁLEZ TAPIA, M.L., “Responsabilidad de prestadores de servicios de la sociedad de información: comentario de la sentencia “Telecinco” contra “Youtube”, *Noticias Jurídicas*, 2011, www.noticias.juridicas.com

GRIMALT SERVERA, P, *La protección civil de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen*, Iustel, Madrid, 2007.

GRUPO DE TRABAJO DE PROTECCIÓN DE DATOS: Informe 1/08, sobre protección de los datos personales de los niños. Directrices generales y el caso especial de los colegios, 18 de febrero de 2008.

HERAS HERNÁNDEZ, M.M., “Internet y el derecho al honor de los menores”, *Revista Ius*, 2012, págs. 93-107.

HERRÁN ORTIZ, A.I., “Las redes sociales digitales: ¿hacia una nueva configuración en los derechos fundamentales en Internet?”, *Revista Vasca de Administración Pública*, 2010, págs. 521-566.

INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) y AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). “Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes sociales online”, 2009 www.inteco.es, www.agpd.es

INTECO y France Telecom España (Orange), “Estudio sobre hábitos seguros en el uso de *smartphones* por los niños y adolescentes”, 2011.

LAMA AYMÁ, A., *La protección de los derechos de la personalidad del menor de edad*. Tesis doctoral dirigida por María del Carmen Gete-Alonso y Calera. Universitat Autònoma de Barcelona (2005).

LORENTE LÓPEZ, M.C., “La vulneración de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los menores a través de las Nuevas Tecnologías”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, núm. 2/2015, 2015, págs. 207-222.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, R., “Servicio Público Electrónico y Responsabilidad”, *Revista Española de Derecho Administrativo*, núm. 155, Cizur Menor, Navarra, 2012, págs. 291-318.

MARTÍNEZ OTERO, J.M., *La protección jurídica de los menores en el entorno audiovisual*, Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona, 2014.

MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J.A., “Implicaciones del uso de internet en la protección del derecho al honor” *Autoridad Civil*, núm. 4, Sección Estudios de Jurisprudencia, 2014, págs. 414-429.

PÉREZ LUÑO, A.E., “La protección de datos personales del menor en Internet” *Anuario de la Facultad de Derecho*, núm. 2, 2009, págs. 143-175.

PRENSKY M., “Digital Natives, Digital Immigrants”, *MCB University Press*, vol.9, núm. 5, 2001.

SALGADO SEGUÍN, V., “Nuestros derechos, en riesgo. Intimidad, privacidad y honor en Internet”, *Revista TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación)*, núm. 85, 2010, págs. 69 a 79.

SANCHIS CRESPO, C., “La tutela judicial del derecho al honor, Internet y la blogosfera” *Diario La Ley*, núm. 8035, Sección Doctrina, 2013.

SANTOS MORÓN, M.J., *Incapacitados y derechos de la personalidad: tratamientos médicos, honor, intimidad e imagen*, Escuela libre, Madrid, 2000.

TRONCOSO REIGADA, A., *Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal*, Civitas, Madrid, 2010.

- “Las redes sociales y la APDCM”, *Revista datospersonales.org*, núm. 43, 2010.

Páginas web

<http://es.lexdir.com/guia/proteccion-de-la-propia-imagen-la-intimidad-y-el-honor-en-internet-2174/>

<http://saladeprensa.telefonica.com/jsp/base.jsp?contenido=/jsp/notasdeprensa/notadetalle.jsp&id=0&idm=es&pais=1&elem=21187>

<http://www.menoresenred.com/legislacion-imagen-menores-internet/>

<https://derechofamilia.wordpress.com/2010/04/26/a-vueltas-con-la-patria-potestad-fotos-y-redes-sociales/>

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/principales_derechos/index-ides-idphp.php

<https://zinetik.com/los-conflictos-entre-padres/>

www.abogares.com/?p=567

www.quees.info/que-es-un-smartphone.html

Reseña jurisprudencial

STJUE de 13 de mayo de 2014, as. C-131/12, *Google Spain SL y Google Inc. vs. Agencia española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González* (LA LEY 51150/2014).

STC 196/2004, de 15 de noviembre. (LA LEY 2437/2004).

STC 99/2002 de 6 de mayo (LA LEY 5500/2002).

STC 81/2001, de 26 de marzo (LA LEY 3383/2001).

STC 9/2007, de 15 de enero (LA LEY 217/2007).

STS de 13 de julio de 2006 (LA LEY 70229/2006).

SAN de 15 de junio de 2006 (LA LEY 78033/2006).

SAP Badajoz 280/2010 de 17 de septiembre (LA LEY 153332/2010).

SAP Madrid 50/2006, de 6 de febrero (LA LEY 350/2006).

SAP Madrid 526/2010 de 23 de noviembre (LA LEY 256810/2010).

Dictamen 2/2009 sobre la protección de los datos personales de los niños (Directrices generales y especial referencia a las escuelas) de 11 de febrero de 2009.